

26.ª REUNION — 18.ª SESION ORDINARIA — AGOSTO 1.º DE 1933

Presidencia del doctor **JULIO A. ROCA**,
Vicepresidente de la Nación

Senadores presentes: Arancibia Rodríguez Alberto, Arenas Mario, Bravo Mario, Castillo Ramón S., Ceballos Reyes Raúl, Correa Francisco E., Galíndez Francisco R., Matienzo José Nicolás, Palacios Alfredo L., Patrón Costas Robustiano, Porto Carlos R., Rothe Guillermo, Sánchez Sorondo Matías G., Santamarina Antonio, Serrey Carlos, Torre Lisandro de la, Vera Cruz, Vera Orampo Horacio, Villafañe Benjamín.

Senadores ausentes, con licencia: Lubary Juan José, Vidal Juan R.

Senadores ausentes, con aviso: Bruchmann Carlos A., Campos Rudecindo S., Cantoni Aldo, Ceballos Mariano P., Eguiguren Atanasio, Laurencena Eduardo, López Peña Lucio, Montenegro Pío.

SUMARIO

1.—Aprobación del acta de la sesión anterior.

2.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones oficiales: El ministro de marina remite la memoria correspondiente al año 1932. Al archivo.

El Consejo General de Educación de Santiago del Estero solicita la sanción del proyecto sobre entrega de 12.000.000 de pesos a varias provincias, del producido de los impuestos a los réditos y a las transacciones. A sus antecedentes.

II.—Petitionen particulares.

III.—Los senadores Galíndez y Castillo presentan un proyecto para construir dos hospitales regionales en los departamentos de Belén y Santa Rosa y otro para tuberculosos en el departamento de Andalgalá (Catamarca). A la Comisión de Obras Públicas.

3.—Moción de preferencia del senador Arancibia Rodríguez para tratar el asunto V de la orden del día número 7, ampliada por el senador Porto, para que se traten los demás despachos de la Comisión de Peticiones y Poderes que figuran en la misma orden del día. Se aprueba.

4.—El senador Sánchez Sorondo presenta un proyecto de resolución referente a la Convención de Berna sobre protección internacional de la propiedad intelectual, y un proyecto de ley sobre propiedad científica, literaria y artística.

5.—Moción del senador Sánchez Sorondo para que el proyecto de ley que ha presentado lo estudie una Comisión Parlamentaria. Se aprueba.

6.—A moción del senador Palacios, se trata sobre tablas el proyecto de resolución del senador Sánchez Sorondo.

7.—Indicación del senador Sánchez Sorondo autorizando a la Presidencia para nombrar la Comisión Parlamentaria.

8.—Moción del senador Matienzo observando la va-

lidez de la ley 11.627, sobre arrendamientos agrícolas, y pidiendo que pase a estudio de la Comisión de Negocios Constitucionales. Se aprueba.

9.—Consideración de los despachos de la Comisión de Peticiones y Poderes en los proyectos por los que se acuerda pensión a la señora Teodora La torre; a las señoritas Sara, María Rosa y Ana Luisa Torino; a la señora Rosario S. de Loza e hijas solteras; aumento de pensión a la señora María Celina Parravicini de Melo; y a la señora viuda e hijos menores del ex senador A. Rodríguez Saa, las dietas correspondientes a dos años. Se aprueban.

10.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación en el proyecto, en revisión, sobre transmisión de establecimientos comerciales e industriales. Se aprueba hasta el artículo 6º, con modificaciones.

—En Buenos Aires, a primero del mes de Agosto de 1933, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice el:

1

ACTA

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión. Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Cuando comienza a leerse, dice el

Sr. Arancibia Rodríguez. — Hago indicación, para que se suprima la lectura del acta y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, así se hará. Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra para cuando termine de darse cuenta de los asuntos entrados.

2

ASUNTOS ENTRADOS

I

Comunicaciones oficiales

El ministro de marina remite la memoria correspondiente al año 1932. *(Al archivo)*.

—El Consejo General de Educación de Santiago del Estero solicita la sanción del proyecto sobre entrega

de 12.000.000 de pesos a varias provincias, del producido de los impuestos a los réditos y a las transacciones *(A sus antecedentes)*.

II

Peticiones particulares

La Cámara Sindical de Empresas Constructoras, formula observaciones al proyecto sobre moratoria hipotecaria. *(A sus antecedentes)*.

—El Congreso Regional de Productores de Entre Ríos y Corrientes solicita la sanción de los proyectos tendientes a aliviar la crisis agraria. *(A sus antecedentes)*.

—El jefe de la Compañía de Boy Scouts «General Francisco A. Ortiz de Ocampo» (La Rioja) solicita la sanción del proyecto sobre nacionalización del scoutismo argentino. *(A sus antecedentes)*.

—La Comisión del Cincuentenario de la Enseñanza Superior Agronómica y Veterinaria Argentina, invita a diversos actos que se efectuarán en La Plata el día 7 del corriente. *(Al archivo)*.

—El Tiro Federal de Catamarca solicita un premio. *(A la Comisión de Peticiones y Poderes)*.

—Sara S. de Castellano, Virginia Hurtado de Mendoza de Redondo, Zoé y Zulema Bialek Laprida, solicitan pensión civil. *(A la Comisión de Peticiones y Poderes)*.

—Constantina F. de Zavalía y Dolores F. de Maniglia solicitan prórroga de pensión civil. *(A la Comisión de Peticiones y Poderes)*.

III

Construcción de dos hospitales regionales en los departamentos de Belén y Santa Rosa y otro para tuberculosos en el de Andalgalá (Catamarca).

—Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para construir dos hospitales regionales en la provincia de Catamarca, en los departamentos Belén y Santa Rosa, debiendo este último constar además de un pabellón con escuela para niños palúdicos, y un hospital para tuberculosos en el departamento de Andalgalá.

Art. 2º — Se gestionará del gobierno de la provincia la donación de los terrenos necesarios a fin de que se implanten en los departamentos mencionados los edificios hospitalarios.

Art. 3º — Destínase la suma de trescientos mil pesos moneda nacional para costear las construcciones proyectadas por el artículo 1º, imputándose este gasto a rentas generales.

Art. 4º — Comuníquese, etc.

Francisco R. Galíndez. — Ramón S. Castillo

Señor presidente:

La lucha del analfabetismo, desarrollada con tanto éxito por el gobierno de la Nación y de las provincias, difundiendo escuelas en todos los confines del país, es la obra más grandiosa a que puede aspirar todo argentino. Es un triunfo definitivo que peligraría malograrse por faltarle el complemento más indispensable para que

público que hizo desde el ejercicio de la función. Ha entendido la Comisión que, dentro de las facultades que le compete, debe acordarse a estas señoritas una pensión graciable de trescientos pesos por el término de cinco años, y por ello lo aconseja.

Igual pedido ha sido formulado en beneficio de la viuda e hijas solteras del doctor Eufasio S. Loza. Como el anterior, el doctor Loza ocupó altas funciones directivas en el país, fué ministro del gobierno nacional, fué gobernador de Córdoba y desempeñó otros cargos también: su desaparición dejó a los suyos en la pobreza. Queda en el ánimo de todos nosotros y de todos los que lo han conocido, la elocuencia con que este hombre hizo el bien público, y la justicia que informa el pedido de pensión para la viuda e hijas solteras del doctor Loza.

Por ello, la Comisión ha considerado el pedido que se formula y solicita al Honorable Senado, que se acuerde una pensión de cuatrocientos pesos mensuales por cinco años.

Ha sido presentado otro proyecto a la Comisión de Peticiones y Poderes, igualmente con un gran fondo de justicia: es el que aumenta la pensión que disfruta la señora viuda del doctor Carlos F. Melo. La Comisión ha tenido en cuenta que existen ya muchos antecedentes de aumento de aquellas pensiones acordadas por la ley 4.349 y no ha encontrado objeción que hacer al pedido formulado por los señores senadores Castillo, Vidal, Ceballos Reyes, Bruchmann y Cantoni. Al contrario, la vida del doctor Carlos F. Melo, su actuación en la Cámara de Diputados, en la cátedra, como publicista también y en todas partes donde le tocó actuar, su palabra llena de erudición, de moral, un defensor continuo y entusiasta de la Constitución y de los principios básicos que sustentan nuestras instituciones, nos hace extender el beneficio que él diera con tanta generosidad, hacia la compañera que fué en su vida, y por eso la Comisión no ha tenido sino satisfacción en aconsejar al Senado que se aumente la pensión a la viuda de Carlos F. Melo en 300 pesos mensuales por diez años.

Llego ahora al último despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes.

Hace poco murió el señor senador Rodríguez Saa, muerte que hemos lamentado todos y que hace innecesario abundar en palabras para fundar este acto de justicia que también va a acordar el Senado, como es el dar a la familia del doctor Rodríguez Saa, a su viuda e hijos menores, dos años de dietas.

Creo que estas razones bastan para pedir al Honorable Senado que preste su aprobación a los distintos despachos que acabo de informar. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente. — En discusión.

—Sin observación, se aprueban en general y en particular, los despachos precedentes de la Comisión de Peticiones y Poderes.

10

TRANSMISION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.—CONSIDERACION

Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha estudiado el proyecto de ley que ha enviado, en revisión, la Honorable Cámara de Diputados, sobre transmisión de establecimientos comerciales e industriales; y, por las razones que expone el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábricas, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.

Art. 2º — Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realizará el acto.

Art. 3º — El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota fir-

mada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, monto de los créditos y fechas de vencimientos si los hay, créditos por los que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por el artículo 4º, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación.

Art. 4º — El documento de transmisión sólo podrá firmarse después de transcurridos diez días desde la última publicación, y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transferencia, podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el Banco correspondiente, de las sumas necesarias para el pago.

Este derecho podrá ser ejercitado tanto por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el artículo anterior, como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos o acreditaran la existencia de ellos por asientos hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio. Pasado el término señalado por el artículo 5º, sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante.

Art. 5º — El comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de diez días, a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial.

Art. 6º — Mediando oposición, y siempre que los acreedores no pudieran ponerse de acuerdo sobre la distribución del precio, el adquirente depositará a la orden del juez, dentro de ocho días de vencido el plazo del artículo anterior, las sumas que deba pagar al contado y sucesivamente las que deba pagar a plazo, a medida que se hagan exigibles, sin perjuicio de lo que deba retener o consignar por mandato judicial.

Art. 7º — En los casos en que el oponente no presentara títulos o su crédito fuera cuestionable, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente, ofreciendo caución bastante para responder a ese o esos créditos.

Art. 8º — Transcurrido el plazo que señala el artículo 4º sin mediar oposición, o cumpliéndose, si se hubiera producido, las disposiciones de los artículos 5º y 6º, podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que, para pro-

ducir efecto con relación a terceros, deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez días en el Registro Público de Comercio o en un registro especial creado al efecto.

Art. 9º — No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4º, salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores.

Estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo.

Art. 10. — A los efectos determinados en el artículo anterior, se presumen simuladas *juris et de jure* las entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor y en tanto cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores.

Art. 11. — En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de ventas en block o fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2º, ajustándose a las obligaciones señaladas en los artículos 4º y 5º en el caso de notificársele oposición.

En caso de que el producto del remate no alcance a cubrir la suma a retener, el rematador depositará en el Banco destinado a recibir los depósitos judiciales, en cuenta especial, el producto total de la subasta, previa deducción de la comisión y gastos que no podrán exceder del quince por ciento de ese producto.

Si habiendo oposición, el rematador hiciera pagos o entregas al vendedor, quedará obligado solidariamente con éste respecto de los acreedores, hasta el importe de las sumas que hubiera aplicado a tales objetos.

Art. 12. — Cuando el importe de los créditos presentados al comprador, más los que el enajenante haya reconocido, excedan del precio de la operación, el adquirente podrá pedir la resolución del contrato dentro del plazo de cinco días. Vencido ese plazo sin haberse formulado demanda, el adquirente responderá solidariamente con el anterior propietario por aquel excedente.

Art. 13. — Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubieran cometido, por el importe de los créditos que resulten impagos,

como consecuencia de aquéllas y hasta el monto del precio de lo vendido.

Art. 14. — El Registro Público de Comercio o el especial que se organice, llevará los libros correspondientes para la inscripción de las transmisiones de establecimientos comerciales e industriales, cobrando a ese efecto los derechos que determinen las leyes de impuestos.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la Comisión, Julio 11 de 1933.

Francisco E. Correa. — Carlos Serrey. — Alfredo L. Palacios.

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Decláranse elementos constitutivos de un establecimiento comercial e industrial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábricas, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.

Art. 2º — Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, sólo podrá efectuarse válidamente previo anuncio durante diez días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realizará el acto.

Art. 3º — El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, créditos por los que se podrá solicitar medidas preventivas de inmediato, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación.

Art. 4º — El documento de transmisión recién podrá firmarse después de transcurridos cinco días desde la última publicación y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transferencia, podrán notificar su oposición al

comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervinieran en el acto reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el Banco de la Nación, de las sumas necesarias para el pago.

Art. 5º — El comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de veinte días, a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial.

Art. 6º — Transcurrido el plazo que señala el artículo 4º sin mediar oposición, o llenándose las formalidades del artículo anterior, si ella se hubiera producido, recién podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que, para producir efecto con relación a terceros, deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez días en el Registro Público de Comercio, o en un registro especial creado al efecto.

Art. 7º — No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4º, salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores.

Estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio.

Art. 8º — A los efectos determinados en el artículo anterior, se presumen simuladas *juris et de jure* las entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor y en tanto cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores.

Art. 9º — En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de ventas fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2º, ajustándose a las obligaciones señaladas en los artículos 4º y 5º en el caso de notificársele oposición.

Art. 10. — Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano, por el importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de sus omisiones y hasta el monto del precio de lo vendido.

Art. 11. — El Registro Público de Comercio o el especial que se organice, llevará los libros correspondientes para la inscripción de las trans-

misiones de establecimientos comerciales e industriales, cobrando a ese efecto los derechos que determinen las leyes de impuestos.

Art. 12. — Comuníquese, etc.

AUGUSTO BUNGE.
Carlos G. Bonorino.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Toda venta, cesión, donación, aporte en una sociedad, participación o liquidación de una casa de comercio o establecimiento industrial debe celebrarse por escrito e inscribirse en el Registro Público de Comercio, para que produzca efecto respecto de terceros.

La inscripción se hará dentro del plazo de quince días, so pena de nulidad.

Art. 2º — El adquirente publicará avisos durante cinco días en dos diarios — de los cuales uno será el de anuncios legales — poniendo en conocimiento del público la operación realizada.

El aviso expresará la clase de negocio, la situación del local que éste ocupa, la fecha de la inscripción del contrato, el nombre y domicilio del adquirente y del antiguo propietario, el plazo que se establezca para que los acreedores formulen oposición y el local, día y hora en que deberán presentarse. Dicho plazo no será menor de cinco días y empezará a contarse desde la última publicación.

Art. 3º — Al formularse la operación el enajenante entregará al adquirente, bajo su firma, una nómina de sus acreedores, con expresión del monto de sus créditos, su causa y la fecha del vencimiento, si la tuvieran.

Art. 4º — Cualquiera de los acreedores reconocidos en esa forma o los omitidos en esa lista que presentaren los títulos de sus créditos y afirmaren su existencia expresando la causa y el monto de los mismos, aunque unos y otros no sean de plazo vencido, podrán formular oposición por escrito al pago del precio, hasta cinco días después del plazo establecido en el artículo 2º.

El locador podrá formular oposición tan sólo por los alquileres de dos períodos de pago vencidos y del período en curso.

Art. 5º — Mediando oposición, y siempre que los acreedores no pudieran ponerse de acuerdo sobre la distribución del precio, el adquirente depositará a la orden del juez, dentro de ocho días de vencido el plazo del artículo anterior,

las sumas que deba pagar al contado y sucesivamente las que deba pagar a plazo, a medida que se hagan exigibles, sin perjuicio de lo que deba retener o consignar por mandato judicial.

Art. 6º — En los casos en que el oponente no presentara títulos o su crédito fuera cuestionable, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente, ofreciendo caución bastante para responder a ese o esos créditos.

Art. 7º — El adquirente que hubiera pagado el precio sin haber efectuado las publicaciones ordenadas, o hubiera hecho anticipos durante la tramitación de la transferencia, no podrá liberarse por esas sumas respecto de los acreedores del anterior propietario. Tampoco podrán computarse para tales efectos las sumas que hubiera entregado a cuenta del precio con anterioridad a la operación.

Art. 8º — Las disposiciones del artículo 2º no se aplicarán a los casos de transferencia en remates públicos de una casa de comercio en bloque, con todos los elementos del fondo de comercio, o de la transferencia en detalle, también en remate público, de las máquinas, mercaderías, útiles, etcétera, que constituyen los elementos materiales de aquel fondo. En esos casos, el martillero recibirá las oposiciones que se formulen antes o hasta el día del remate y las presentará al juez que corresponda, conjuntamente con la boleta de depósito del precio de venta después de separar lo relativo a la comisión y gastos.

El remate debe anunciarse con ocho días de anticipación, en la forma establecida para la publicación a que se refiere el artículo 2º.

Si habiendo oposición, el rematador hiciera pagos o entregas al vendedor, quedará obligado solidariamente con éste respecto de los acreedores, hasta el importe de las sumas que hubiera aplicado a tales objetos.

Art. 9º — En los casos de oposición por aporte a una sociedad, o partición o liquidación, si alguno de los socios o el adquirente, en conocimiento de la existencia de aquellos créditos, no alegase la nulidad de la sociedad o de la partición o adjudicación, dentro del plazo de quince días, la sociedad o el adquirente en su caso, quedarán solidariamente obligados con el anterior propietario respecto de los acreedores de éste.

Art. 10. — Cuando el importe de los créditos presentados al comprador, más los que el enajenante haya reconocido, excedan del precio de la operación, el adquirente podrá pedir la resolución del contrato dentro del plazo de cinco días. Vencido ese plazo sin haberse formulado

demanda, el adquirente responderá solidariamente con el anterior propietario por aquel excedente.

Art. 11. — Cuando se transfiera una casa de comercio o establecimiento industrial bajo la designación genérica de «fondo de comercio», u otra semejante, se entenderá que dicha transferencia comprende los elementos materiales e inmateriales constitutivos del fondo de comercio. Son elementos materiales las maquinarias, mercaderías, útiles de explotación, etcétera. Son elementos inmateriales el nombre o enseña comercial, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los diseños y la clientela.

El vendedor quedará obligado en ese caso a cumplir las formas legales indispensables para la transferencia de esos distintos elementos.

Art. 12. — Comuníquese, etc.

Ramón S. Castillo.

Sr. Presidente. — Está en discusión en general.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

En el año 1928, tuve ocasión de informar este mismo proyecto, el cual mereció la aprobación del Honorable Senado, pero, por una de esas maniobras tan frecuentes en aquella época desdichada, se dejó al Cuerpo sin quórum, después de haber sido aprobados los primeros siete artículos. Pasados estos cinco años, tan densos en acontecimientos que han cambiado la faz política del país, tengo verdadera satisfacción en contribuir de nuevo con mi palabra y con mi voto a una reforma tan conveniente como la que se propone.

Pocas modificaciones a la ley mercantil han merecido tantas manifestaciones de opinión enderezadas a propiciar su sanción.

Artículos de la prensa diaria, sanciones de los congresos de abogados, solicitudes de todas las entidades que representan a la industria y al comercio mayorista buscaban la protección de la ley para sus legítimos derechos.

Aún días después de presentado el despacho de la Comisión, han tenido entrada al Senado 3 ó 4 solicitudes más propiciando la sanción de esta ley.

Es que la falta de medidas de previsión al respecto en nuestra legislación mercantil, es un verdadero vacío, una omisión al amparo de la cual se han cometido enormes abusos, actos dolosos, defraudaciones, dejando sin satisfacción créditos nacidos en el juego regular del comercio.

La reforma no sólo beneficiará a los industriales y comerciantes mayoristas, sino al mis-

mo comercio al por menor, cuyas perspectivas disminuyen desde que se ve minada la base de confianza en aquellos que lo sostienen con el crédito que le conceden.

No se puede, sin embargo, creer que ha sido una improvisación de parte de los autores del Código de Comercio, que ha constituido un cuerpo de legislación de los más adelantados en su época. La cuestión es que el comercio de aquel tiempo no requería medidas de esta naturaleza; pero las complicaciones de la vida moderna, la multiplicidad mayor de los negocios, el ritmo más apresurado de la vida actual han transformado el comercio patriarcal de mediados del siglo 19, en el actual, más movido, más improvisado. Una de sus características es que comienza su evolución, por lo general, más que por los capitales que se aportan, por el crédito que le dispensan generosamente las entidades industriales y comerciales mayoristas, y que se ven obligadas a mantener sin reatos para conservar su clientela y para desarrollar normalmente sus propias operaciones.

Desgraciadamente, al lado del uso de este maravilloso instrumento que es el crédito, que es la verdadera palanca a que se refería Arquímedes cuando pedía un punto de apoyo para mover el mundo, surge necesariamente el abuso: comerciantes poco escrupulosos, ansiosos de hacer rápidas ganancias sin reparar en los medios o que se ven en dificultades y que no tienen ánimo o probidad suficiente para resolverlas de un modo normal y correcto, han acudido al sistema de burlar los intereses de sus acreedores por medio de la enajenación total de las casas de negocios, sin que el adquirente se haga cargo de los compromisos. De esta manera, los acreedores se encuentran con que desaparece la base sobre la cual ellos podrían hacer efectivas las medidas para la seguridad de sus créditos, sin que tengan acción contra los que reemplazan a sus primitivos deudores.

Se podría decir que ellos podrán ocurrir a hacer declarar en quiebra al deudor o a pedir la nulidad de los actos verificados en perjuicio y fraude de sus derechos. Pero estas acciones fáciles de entablar contra el deudor primitivo es difícil hacerlas incidir sobre aquellos que le suceden en el manejo de los negocios.

La quiebra, para ser eficaz, tiene que ser precedida por la cesación de pagos o reunirse un conjunto de circunstancias para hacer efectivos los derechos contra el adquirente, circunstancias que se trata generalmente de evitar.

En cuanto a la acción «pauliana», cuando se

trata de dejar sin efecto por medio de ella un acto oneroso, tienen que concurrir diversas circunstancias, entre ellas que el adquirente sea cómplice en el fraude, esto es, que conozca la insolvencia del vendedor; circunstancias de orden psicológico que son muy difíciles de probar en la mayor parte de los casos.

Lyon Caen y Renault exponen el antecedente de que en el comercio de París se ha usado durante mucho tiempo proceder la enajenación de esta clase de negocios, o *fonds de commerce*, como le llaman los franceses, de una publicación llamando a los acreedores para que pudieran hacer efectivos sus derechos. También en nuestro comercio ha existido durante mucho tiempo esta costumbre; pero esta precaución, desde el momento que no está exigida por la ley, no se puede considerar como esencial para la validez de los contratos. Y aun hecha, es discutible que los acreedores primitivos del comerciante tengan acción contra el adquirente del negocio y contra las mercaderías que lo constituyen, desde el momento que no existe texto legal en qué apoyar sus pretensiones.

La primer tentativa de introducir una reglamentación legal para defender los intereses de los acreedores de las casas de comercio, surgió en Francia el año 1885, en que se debatió en el Senado un proyecto tendiente a ese fin, proyecto que quedó sin sancionarse, y recién en 1909 se dictó la ley, que, modificada posteriormente, en 1913, es la que hoy rige. Esta ley comprende tres puntos: corrobora los privilegios de los vendedores de los establecimientos comerciales, establece los medios de seguridad en favor de los acreedores de los mismos y legisla la prenda que se puede constituir sobre esta universalidad de bienes. Nuestra ley considera solamente el segundo de estos aspectos. La materia de privilegios está ampliamente legislada por los códigos Civil y Mercantil y en cuanto a la prenda existen también sanciones legislativas que la rigen, y si se cree conveniente ampliarlas, habría que hacerlo por medio de otra ley, cuya estructura sería distinta de la que hoy se considera.

Disposiciones análogas existen en la legislación alemana y en el Código suizo de las obligaciones; pero responden a conceptos jurídicos distintos de los que imperan entre nosotros.

En nuestro Congreso han habido diferentes iniciativas tendientes a llegar a esta reforma. En la Cámara de Diputados, en particular, las presentaron, sucesivamente, los diputados Cellesia, Rocca, Ortiz y Melo y últimamente el diputado Colombres, que es el autor del pro-

yecto a nuestra consideración. En el Senado hubo también el proyecto del senador Melo y el despacho de la Comisión de Legislación a que me he referido al comienzo de mi exposición. Este despacho ha sido tomado casi literalmente como proyecto por el señor diputado Colombres, quien lo hace constar así en los fundamentos en los cuales se apoya.

El miembro informante, en cambio, que enuncia todos los antecedentes legislativos omite el más importante, que era precisamente el despacho de la Comisión de Legislación del Senado, que sirvió de base al proyecto y al despacho de esa Comisión y a la sanción de la Cámara de Diputados que ahora viene en revisión.

Las disposiciones primordiales de la ley que consideramos son las siguientes: 1º, se define lo que constituye un establecimiento comercial, con el objeto de que cuando se haga una enajenación de esta naturaleza sin mayores especificaciones, se conozca determinadamente cuál es el contenido del contrato, evitándose pleitos que podrían sobrevenir, porque si es notorio que en las ventas de una casa comercial están necesariamente comprometidas las cosas materiales, las mercaderías, las instalaciones, muebles, útiles, etcétera, no sucede lo mismo con los derechos, privilegios, patentes de invención, marcas de fábrica, enseña mercantil, contratos de locación, etcétera y, sobre todo, con ese algo imponderable que los italianos llaman *avviamento* y que entre nosotros se conoce con el nombre de llave, es decir, la esperanza de lucros futuros que radica, en la firma y buen nombre del negocio, en su honestidad, en las marcas que explota, en el sitio que ocupa dentro de la ciudad, etcétera.

Indudablemente que esta enumeración es solamente para el caso de silencio, pero no impide que en el contrato se comprenda menos del contenido total, eliminándose parte de lo que constituye la casa de negocio, o más, haciendo entrar, por ejemplo, en la venta, los inmuebles o créditos activos y pasivos.

Después vienen las medidas en defensa de los derechos de los acreedores, que pueden resumirse así: la publicación previa a la consumación de la operación por un plazo que se establece; el derecho de pedir medidas preventivas por aquellos acreedores cuyos créditos no estén vencidos; la obligación del comprador o del que interviene en la venta, de retener fondos suficientes para cubrir aquellos acreedores que se presentan reclamando sus depósitos dentro del plazo que se establece; la

declaración de nulidad con presunción *juris et de jure* de toda entrega hecha a cuenta o por seña, que pueda recaer en perjuicio a los acreedores; la prohibición de enajenar por una cantidad menor que el monto total de la deuda, y la responsabilidad solidaria que se establece para todos los que intervienen, por las infracciones u omisiones que cometan.

Las modificaciones introducidas por la Comisión al proyecto venido de la Cámara de Diputados no son de mayor cuantía. Se disminuye a cinco días el plazo de la publicación que hay que hacer y se aumenta a diez días el término dentro del cual deben presentarse las reclamaciones ante el comprador o a los que intervienen en el contrato. De esta manera se establece el mismo plazo de quince días desde el momento que comienza la negociación hasta su consumación, con una visible economía en los gastos de publicación, que muchas veces son excesivamente crecidos en proporción a la importancia de los negocios.

Se disminuye a diez días el término dentro del cual debe mantenerse el dinero en poder del comprador para responder a las reclamaciones que pudieran hacerse, en vez de veinte días que traía el proyecto de la Cámara de Diputados. Diez días es el plazo que señalaba el proyecto Melo, que el Senado aprobó en su anterior sanción.

Se determina la posibilidad de hacer la venta en remate en bloque y se prevé el caso de que hecha la enajenación por subasta pública no alcance a cubrir el monto de los créditos.

Finalmente, en el artículo 9º, se incluyen los créditos provenientes de gastos generales, por cuanto éstos, que son alquileres, o sueldos de dependientes, tienen un origen igualmente legítimo que las mercaderías.

También se reduce la responsabilidad por las omisiones o infracciones a los que personalmente las hayan cometido, de acuerdo con el criterio según el cual sólo debe responder de la culpa o negligencia quien haya incurrido en ellas.

Se aceptan tres artículos del proyecto Castillo. El 6º, que prevé las ventas hechas a plazos, y se determina sobre la distribución del precio, estableciéndose que el adquirente lo depositará a la orden del juez, a medida que los plazos señalados para el pago venzan. El 7º, que autoriza al enajenante cuando se le reclamen créditos cuya existencia él desconozca a recibir el precio del adquirente, dando fianza bastante, con lo que se evitan reclamaciones injustificadas que podrían perjudicar

los intereses de aquél y a la vez se asegura al posible acreedor por medio de la garantía que el enajenante ha de dar.

El artículo 12, que autoriza al adquirente, en caso de que los créditos que confiesa el enajenante, unidos a los que se presenten con posterioridad, excedan del precio convenido, para prevenir posibles engaños de que se puede hacer víctima a algún interesado en la adquisición de un negocio mediante ocultación de parte del pasivo.

El sistema que acepta este proyecto es superior al de las leyes comerciales alemanas y suizas, que determinan que esta clase de negocios tienen una personalidad propia, autonomía como sujetos u objetos de derechos, porque este sistema es contrario a las bases de nuestra legislación y perjudica de hecho, a los acreedores de carácter civil, estableciendo una verdadera separación de patrimonios y es superior, también, al sistema de la legislación francesa, que permite, cuando el precio de una casa de negocio no alcanza a cubrir a los acreedores, lo que ellos llaman «surenchère», es decir, el derecho de ofrecer un sexto más del precio para poder quedarse ellos con el negocio, porque se requiere la concurrencia de todos los acreedores y se les obliga a veces a entrar en un orden de negocios extraño a sus actividades; presenta así un carácter poco práctico, de modo, que pocas veces tendría aplicación entre nosotros.

Tales son en sus lineamientos generales, las bases del proyecto en discusión, que la Comisión espera obtendrá la aprobación del Senado para que se incorporen estas reformas a nuestra legislación, las que tienen, en realidad, un carácter impostergable.

Sr. Archibia Rodríguez. — Propongo, señor presidente, que se comunique en el día, las sanciones que ha dado hoy el Senado.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Cuando llegó a esta Cámara la sanción de diputados, me informé del proyecto y anoté errores que yo reputo fundamentales.

A fin de que se reglamentara ese contrato en una forma orgánica, presenté un proyecto considerando el asunto en la forma que yo entiendo que debe encararse; estas circunstancias me ponen en el caso de explicar ahora la razón del mismo.

Un fondo de comercio, o casa de comercio, o establecimiento industrial es un bien complejo. La doctrina señala ya estos dos elementos perfectamente bien deslindados: los elementos materiales y los elementos inmateriales.

Se comprenden en los primeros las máquinas, mercaderías, los útiles, etcétera; forman los segundos, la patente, la marca de fábrica, la clientela, etcétera. Esta división tiene importancia para cuando se legisle el contrato de prenda, porque solamente es posible constituir la sobre los elementos inmateriales, muy difícil sobre los demás e imposible en otros o sea sobre las mercaderías. Por consiguiente, este problema hay que contemplarlo bajo su doble aspecto: en cuanto a la obligación y derechos de los contratantes y en cuanto a los efectos que ese contrato produce respecto de terceros, porque bien puede ocurrir que en el momento de la transferencia existan operaciones a liquidar y deudas a pagar.

Respecto de los contratantes se considera conveniente establecer que el acto deba celebrarse por escrito, e inscribirse en el Registro Público de Comercio, en razón de la naturaleza compleja de los bienes que comprende la venta de un comercio, a fin de que las partes puedan establecer con precisión sus obligaciones recíprocas, no tan sólo respecto al vendedor, sino también con respecto al comprador. Ofrece también la ventaja de evitar la enajenación clandestina. Con esas dos previsiones se habrá atendido las exigencias de la forma de este contrato en cuanto ella responde a asegurar los derechos de los contratantes, pero no respecto de los terceros, puesto que al transferir una casa de comercio no se transfieren las deudas, vale decir, que el adquirente no se obliga a pagar las deudas del anterior propietario.

Para evitar que los acreedores sean burlados, privándolos de la garantía con que contaban, viene la segunda previsión, que consiste en imponer la obligación de publicar anuncios haciendo saber la transferencia ya efectuada, a fin de que los acreedores puedan comparecer en tiempo oportuno a formular oposición, no al acto de venta que ya se ha realizado, sino al pago del precio que es lo único que a ellos les interesa y sobre lo único que tienen derecho.

Estos principios no han sido consultados en el proyecto que ha venido de la Cámara de Diputados. Así, se nota en el artículo 2º, que establece: «Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un es-

tablecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa o privada, o en público remate, «sólo podrá efectuarse válidamente previo anuncio durante diez días en el Boletín Oficial de la Capital Federal». Otros artículos establecen que durante ese plazo de publicidad los acreedores podrán formular oposición al pago del precio, y finalmente, se dispone que después de la expiración de esos plazos recién podrá otorgarse el documento que acredita el contrato e inscribirse por consiguiente en el Registro Público de Comercio. Nos hallamos de ese modo en el caso de un contrato nulo, que sin embargo produce efectos, como es la obligación que se impone al vendedor de depositar el precio de la compra.

Podrá suceder dentro de esas previsiones que el vendedor que ha consignado a la orden del juez o ha entregado simplemente a los acreedores el precio antes de haber inscripto su contrato se vea privado de la cosa porque otro acreedor desconocido hasta ese momento embarga las mercaderías y las saca del local, como tendría derecho a hacerlo. Resultaría entonces que dentro del mecanismo de la ley se habría autorizado un medio fácil de burlar el derecho del comprador y el de los acreedores, creándose una situación más grave que la de la actualidad, a pesar de todas las deficiencias de la reglamentación vigente.

Es lo que he calificado como un error fundamental. A mi juicio, una vez celebrado el contrato e inscripto en el Registro Público de Comercio, recién el comprador debe publicar los anuncios llamando a los acreedores para que formulen oposición al pago del precio, y cuando los acreedores concurren, dentro de los plazos establecidos por la ley, formulando oposición, el comprador debe depositarlo a la orden del juez, para que los acreedores y el antiguo propietario plénten sus disidencias al juez, a fin de que éste resuelva lo que corresponda. Mientras tanto el vendedor debe quedar desligado de toda vinculación con aquéllos, por cuestiones a las cuales él es completamente extraño. Esta forma simple de reglamentar la compraventa de las casas de negocios, ha de facilitar las operaciones de esa naturaleza.

El proyecto en discusión coloca al vendedor en una situación incierta. En el momento de celebrar el contrato ha de vacilar antes de resolverse a depositar el precio a la orden del juez o a entregarlo a quien corresponda, si previamente no obtiene el instrumento del contrato, que le asegure su situación contra toda emergencia respecto de terceros, y esta ley, lejos de ofrecerle esta seguridad, se la quita, porque establece en

uno de sus artículos, que después de perfeccionar a la operación, después de haberse pagado el precio, recién se puede escriturar el contrato.

Considero que el proyecto es incompleto, legisla solamente sobre la compraventa de las casas de comercio al contado. No existía ninguna disposición que contemplara el caso de las ventas a plazos. La previsión consignada en el proyecto de la Comisión es la que yo he proyectado, y a la que me he referido anteriormente. No contempla los casos de transferencia de casas de comercio por aporte a una sociedad, que es el caso más frecuente y donde se cometen mayores abusos. No contempla los casos de transferencia por adjudicación, por división de herencia, que también facilitan el abuso que se trata de evitar por esta ley. Dice uno de sus artículos: «Toda transferencia a título oneroso», es cierto; pero no se ha reglamentado los efectos que produce la transferencia en los casos de aporte de sociedad, división, partición. Solamente se reglamenta la forma en que se ha de pagar o depositar el precio; se omite, en cambio, establecer cuál es la situación de los acreedores en los casos en que la transferencia se haya efectuado para alguno de aquellos efectos.

En otra de sus disposiciones establece el proyecto que en ningún caso en que las deudas excedan del precio de compra, se realizará válidamente una operación de esta naturaleza; lo que equivale a prohibir la compraventa de una casa de comercio cuyo pasivo exceda del activo. ¿Por qué razón ha de prohibir la ley la compraventa de una casa en esas condiciones? ¿Para proteger o amparar a quién? ¿A los acreedores? Está bien, señor presidente, que se le obligue al vendedor a entregar todo el precio convenido y que se le imponga la obligación de pagar el remanente, puesto que así quedaría completamente garantizado, pero no hay razón para prohibirle al comprador a adquirir una casa proque su pasivo es superior al activo, si él asumiera esa responsabilidad.

Concretando, señor presidente, considero que este proyecto, en cuanto establece una sanción de nulidad para la compraventa, cuando no se haya publicado el anuncio respectivo, es inconveniente y puede ser causa de graves perjuicios a los contratantes y que la omisión de legislar sobre efectos de la transferencia por aporte o por partición lo hacen incompleto, y sería lamentable que se perdiera esta oportunidad para dar la ley que realmente exige el comercio.

Nada más.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

La Comisión, al encontrarse con el proyecto

venido en revisión de la Cámara de Diputados y el elaborado por el señor senador por Catamarca, ha procurado conservar en lo posible la forma y redacción usada por aquella Cámara, siempre que las disposiciones condujeran al mismo resultado, porque entendía, que es un deber hasta de cortesía parlamentaria, no hacer cambios de forma que no tengan como consecuencia una modificación de fondo, y que importaría una especie de petulancia de parte de la Comisión, considerar que la redacción que ella haga, y tenga el mismo fin, es superior a la que ha venido con sanción de la otra Cámara.

En realidad, los dos proyectos coinciden en sus líneas generales. La objeción principal que hace el señor senador por Catamarca se refiere al artículo 2º, en cuanto habla de que no se podrá ejecutar válidamente la operación sino previa la publicación. Pero no toma en consideración que esta ley no tiene por objeto modificar los principios que rigen la compra-venta mercantil, en cuanto a los derechos del comprador y del vendedor; no se altera ni la capacidad de los primeros, ni las formas de hacerla efectiva en nada, sino sólo en cuanto se refiere a terceros; es una ley de defensa de los derechos de los acreedores, impidiendo los actos de defraudación de esos intereses a que me he referido.

Todavía, para prevenir la objeción que acaba de hacer el señor senador en el artículo 2º, en el último despacho de la Comisión — que tiene en su mesa el señor secretario — se agrega después de «válidamente» las palabras «con relación a terceros», de manera que dice: «sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros». Lo que quiere decir que al convenirse la operación, se hará por escrito indudablemente, pero todas estas medidas de publicidad son en defensa de los derechos de terceros que en ellas no intervienen y que son acreedores legítimos de la casa traspasada.

Hay otra objeción también: ¿por qué no se permite hacer la enajenación por un precio inferior al monto de las deudas? Precisamente, esa es la defensa de los acreedores, señor presidente. Si fuera permitido hacer la venta en privado de una casa de negocio por una cantidad inferior al monto de las deudas, quiere decir que no habríamos hecho ninguna defensa de los derechos de los acreedores. ¿Qué van a hacer valer, si llega a permitirse la venta por un precio inferior al monto de los créditos?

Ahora, en cuanto a que existan casos en que pueda convenir a los acreedores aceptar una operación de éstas en menoscabo de sus inte-

reses, los salva perfectamente la última parte del artículo, que dice: «salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación».

De manera que si el activo del negocio no alcanza a cubrir el pasivo y hay interés en que se haga la venta, tendrá fácilmente la aquiescencia de los acreedores; sin ella, no se puede vender. Esa es la defensa de los acreedores. Si fuera lícito vender a un precio menor a la totalidad de las deudas, llegaríamos al caso de que los intereses de los acreedores serían defraudados, porque se vendería por menos que el monto de su deuda. Siempre le queda un recurso al que quiera enajenar la casa, y sería recurrir a la venta en remate público, sea en block o por partes, en cuyo caso la ley establece la forma en que se ha de depositar el precio y distribuirlo después entre los acreedores a prorrata de su interés respectivo.

También tomando un artículo del proyecto del señor senador, se ha previsto el caso de ventas a plazos, de manera, pues, que las objeciones que hace el señor senador no tienen fundamento serio. La ley llena cumplidamente este objeto que se propone, que es asegurar los derechos de los acreedores, que son los defraudados día a día, vendiéndose las casas, entregando el activo al comprador y dejando sin ninguna garantía a los acreedores. Estas son observaciones en particular, pero en el fondo la ley prevé todos los casos si se trata de transacciones a título oneroso, porque en los casos de partición sucesoria, en que como es sabido los herederos responden de las deudas del causante, desde el momento que aceptan la herencia, ellos entonces responderán lo mismo con esta ley como por las prescripciones del Código Civil.

No dudo que esta ley no es perfecta y que en la práctica se demostrarán los inconvenientes que ella tenga, pero tal como ha venido de la Cámara de Diputados y con las modificaciones introducidas por la Comisión, llena perfectamente las necesidades que se persiguen.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

El señor senador por Salta dice que las observaciones que formulé no tienen fundamento, pero quiero recordarle que en Francia, cuando el pasivo es superior al activo, la defensa que tienen los acreedores inscriptos está en la facultad de licitar el bien ofreciendo pagar mayor suma que la que pagó el adquirente. La aplicación de esa disposición legal ha ocasionado en Francia muy serias dificultades, y ya se ha propuesto en ese país modificarla estableciendo una análoga a la que propongo en el proyecto, o sea imponiendo en ese caso al adquirente la

obligación solidaria con el deudor por el excedente del precio.

En esa forma se evita que se declare inenajenable una cosa por el solo hecho de que tenga el dueño acreedores por una suma mayor del valor de la cosa y se garantiza el derecho de los acreedores, que es lo que en realidad se trata de reglamentar en esta ley.

Respecto de la otra observación, ella es exacta, en cuanto se refiere a los acreedores, pero yo he dicho que es necesario que las partes contratantes tengan su garantía, sobre todo el adquirente, y esa garantía está en el contrato que se inscribe en el registro público de comercio. Después que se haya cumplido con esa formalidad, entonces recién se podrá exigir el pago del precio. Lo contrario le crea un gravísimo peligro que podría presentarse en la forma que ya he expresado.

Sr. Serrey. — Observo, señor presidente, que la exigencia de la inscripción previa del contrato antes que esté efectuado definitivamente, es contraria al sistema de nuestras leyes, que establecen que todas las enajenaciones de inmuebles, etcétera, se inscriben una vez que ellas se hayan consumado, y no antes. Y se consume con relación a terceros una vez que llenadas las formalidades se firma el instrumento de la enajenación, porque esta ley lo que trata de reglamentar son los efectos con relación a terceros, sin modificar las reglas generales que rigen entre los contratantes.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la Comisión:

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En discusión, en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Este artículo, o significa que todos los bienes que comprende el fondo de comercio se han de transferir tan sólo con las formalidades que la ley establece, o es simplemente una definición de carácter general, sin consecuencia jurídica alguna. Yo desearía saber cuál es el criterio de la Comisión, porque según sea el criterio de ella, voy a proponer una modificación.

¿Entiende la Comisión que las formalidades de esta ley son bastantes para la transmisión de todos los elementos constitutivos del fondo de comercio, o no?

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

La Comisión, señor presidente, entiende que la transmisión del fondo de comercio implica la transferencia de todo lo que en el artículo se enumera, y el objeto es el que ya he expresado al informar en general el proyecto, esto es, que cuando se venda un establecimiento comercial o el fondo de comercio, sin especificar detalles, comprende la totalidad de lo que el artículo determina, sin perjuicio de que, como la venta es un contrato consensual, pueda comprender más o pueda comprender menos, según lo que el vendedor y el comprador estipulen, siempre que no recaiga en perjuicio de los deudores.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Yo no estoy de acuerdo con esa conclusión. El fondo de comercio comprende muchos elementos, entre ellos el derecho al contrato de locación. El comerciante vende su fondo de comercio con el contrato de locación, si en este contrato se lo ha autorizado para cederlo libremente, pero si no existe esa cláusula, entonces, necesitará del consentimiento del dueño del local. De manera que, por el mero hecho de la venta del fondo de comercio, el contrato de locación no se transmite.

Cuando se venden enseñas de comercio o marcas de fábrica, la ley especial tiene también un procedimiento que debe cumplirse bajo pena de nulidad. Si no se cumplen esas formalidades establecidas por la ley, cualquiera podría embargar o hacer enajenar ese derecho que, sin embargo, pertenece al fondo de comercio, y no obstante haberse cumplido las formalidades de la ley que discutimos.

Es por eso que yo he dicho hace un momento, que si el artículo tiene el carácter de una mera definición de lo que debe entenderse por fondo de comercio, yo acepto que pueda hacerse esa definición en la ley, pero si se le atribuye un efecto jurídico, está mal, y para corregir el error, propondría otra definición, que a mi juicio podría salvar el inconveniente, y que es un inciso del último artículo de mi proyecto.

Propondría, pues, a la Comisión, que aceptara este inciso que no cambia nada el fondo de la ley, y que dice así: «El deudor quedará obligado, en ese caso, a cumplir las formalidades legales indispensables para la transferencia de los distintos elementos del fondo de comercio».

Precisamente para evitar, señor presidente, que por interpretación se llegue a establecer lo que acaba de decir el presidente de la Comisión.

Sr. Serrey. — La Comisión no acepta, señor

presidente, porque lo considera inútil; el que celebra un contrato se atiene a todas las consecuencias que emergen de ese acto, a todo lo que pueda considerarse. Es uno de los principios generales aceptados por la legislación civil al reglamentar los efectos de los contratos, una consecuencia necesaria del acto que realiza. La propuesta del señor senador importa una prescripción inútil y sobreabundante de la ley. ¿Por qué no vamos a atenernos en esto a las leyes generales que rigen las obligaciones de todo vendedor?

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Me parece que no hay boletín oficial en la Capital Federal; yo, por lo menos, no lo conozco. Me parece, además, que exigir que las publicaciones se harán en los diarios, es inconveniente, porque en muchas localidades no hay diarios, sino periódicos, que salen una o dos veces por semana. Propondría que se dijera: «en diarios o periódicos», en lugar de «diarios».

Sr. Serrey. — No hay inconveniente, señor presidente, porque, en realidad, puede ocurrir lo que dice el señor senador de que no salgan diarios en algunas localidades.

Sr. Matienzo. — Propondría también que se dijera «el boletín oficial respectivo», en lugar de «el boletín oficial de la Capital Federal».

Sr. Serrey. — Ya dice así el artículo, señor senador: «Boletín oficial de la Capital Federal o de la provincia respectiva». Naturalmente que se publicará en el boletín oficial, donde lo haya.

La Comisión acepta solamente agregar las palabras «o periódicos».

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º con la modificación aceptada por la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se aprueba en igual forma el artículo 3º.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Presidente. — Está en discusión.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Es sabido que solamente los comerciantes llevan libros rubricados, de manera que los no comerciantes no podrán comprobar su crédito, y sin embargo merecen la misma protección.

Entre esos acreedores que puedan oponerse

a la entrega del precio, se halla el dueño del local. ¿En qué condiciones está el que alquila un negocio cuando los transfiera a otro el locatario que está debiendo los alquileres? En Francia se estableció primeramente que tendría derecho el locador a retener el precio por todo el término de la locación, pero después hubo que dictar otra ley limitando el derecho del locador para hacer retener el precio solamente de las mensualidades o períodos determinados.

Por esta ley que se proyecta, ese acreedor no podría oponerse al pago del precio, y entonces vendría una cuestión muy complicada para saber cuál es la situación del locador que ve cambiar de locatario, por otro que no le ofrece garantías, sin su consentimiento y sin poder formular oposición al pago, ni embargar las mercaderías, porque ya no pertenecen a su deudor.

Por otra parte, yo creo que no es conveniente limitar la prueba de los créditos a los que tengan libros rubricados; cualquier acreedor, aunque no justifique su crédito, cualquiera que afirme que es acreedor, puede oponerse al pago del precio. El pago o entrega es ya otra cosa.

Por eso yo insisto en lo que había dicho: es necesario que el comprador, que es extraño a todo esto, quede libre, que entregue su precio y reciba la cosa, y el vendedor, que sería el culpable de todos los conflictos, que afronte las contingencias de los pleitos con sus acreedores.

Yo propongo, señor presidente, que se suprima la parte que dice: «como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos o acreditaran la existencia de ellos por asientos hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio».

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

El artículo, a juicio de la Comisión, contempla los derechos de los acreedores civiles y comerciales. Dice, en efecto: «Como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos o acreditaran la existencia de ellos». Los comerciantes son los únicos que podrán acreditar sus créditos por los asientos hechos en los libros y los acreedores civiles podrán justificar sus créditos presentando los títulos de los mismos.

El señor senador ha citado, por ejemplo, el caso del locador; pero el locador o dueño del edificio tendrá los títulos de propiedad o el contrato de locación o cualquier medio de

los que la ley exige que justifique para poder trabar embargo preventivo. Si hay alguno cuyo crédito esté garantido es precisamente el locador, por los preceptos comunes de las leyes civiles, por los privilegios que ellas le acuerdan.

El señor senador propone que se dé facultades a cualquiera que se diga acreedor para oponerse; pero esto es darle una extensión inaudita. No es posible admitir que cualquier persona por el sólo hecho de decirse acreedor, sin presentar el título justificativo de su condición de tal, pueda formular oposición al precio. Eso sería entregar al arbitrio de las personas la suerte de los contratos. Todo acreedor debe tener títulos de sus créditos en alguna forma, y si no los tiene, quiere decir que no ha sabido defender sus derechos. La ley no puede llevar su protección a personas que no pueden probar el título para sus créditos, hasta el punto de perjudicar operaciones legítimas como esta. No se puede llegar a estos extremos.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Me voy a permitir presentar un caso común, para probar lo que afirmo. Un empleado que ha sido despedido de una casa de comercio, pide la indemnización respectiva. El comerciante se la niega. Ese empleado se presenta oponiéndose al pago del precio hasta tanto no se le pague la indemnización. ¿Qué título va a presentar? Ninguno. El vendedor recibe el dinero. Se lo ha gastado; es un insolvente. El comprador no puede responder de ese empleado, que no ha podido probar, que no se ha presentado en forma. ¿En qué condiciones queda?

He citado este ejemplo, pero podría haber citado muchos más, pues hay miles de ellos. Acá no se trata de pagar, sino simplemente de que el precio se consigne o se retenga hasta que el acreedor haga uso de su derecho. No hay derecho de oposición; basta que la persona afirme que es acreedor de la casa, el título de acreedor, para que se retenga el precio y se consigne a la orden del juez. Ya vendrá el deudor a discutir, pero no es posible limitar a los comerciantes que tengan libros llevados en debida forma.

Sr. Serrey. — Los dependientes tienen su protección y medios de prueba en los libros de su principal, en donde consta el cargo que han ejercitado. En cuanto a los comerciantes que no llevan libros, éstos no tienen la protección legal, pues ella sólo se extiende a los que los llevan en la forma que lo establece el artículo 53.

Sr. Castillo. — Y los médicos, a quienes se

Agosto 1º de 1933

CAMARA DE SENADORES

26ª Reunión. 18ª Sesión ordinaria

le deben honorarios, no llevan libros. ¿Cómo afirman su título al crédito?

Sr. Serrey. — En ese caso, están las recetas en las boticas. La Comisión mantiene su artículo.

Sr. Castillo. — Yo propongo que se vote por partes.

Sr. Presidente. — Se votará por partes.

—Se lee nuevamente el artículo 4º hasta donde dice: «necesarias para el pago».

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Castillo. — En caso que fuera rechazada la segunda parte del artículo del despacho de la Comisión, yo propongo la siguiente modificación: «Este derecho podrá ser ejercitado tanto por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el artículo anterior, como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos o afirmaren la existencia de los mismos, dando la causa de la obligación».

Lo demás como está en el apartado, en la misma forma.

Sr. Correa. — ¿Qué necesidad hay de expresar la causa de la obligación?

Sr. Castillo. — Para evitar los abusos posibles.

Sr. Correa. — Pero sin ninguna consecuencia, porque no tiene fuerza esa causa. Se le va a admitir la oposición por una simple afirmación.

Sr. Castillo. — Es importante para ser más verosímil la existencia del crédito.

Sr. Correa. — Aunque sea un crédito inverosímil, si el oponente afirma su existencia, habría que admitir el reclamo.

Sr. Castillo. — Yo estoy de acuerdo; me basta la afirmación de que soy acreedor y da el monto del crédito.

Sr. Correa. — Yo creo que un acreedor que no conste en los libros y tenga título, será un acreedor un tanto imaginario, y darle personería para interrumpir una operación legítima, es introducir un elemento de perturbación.

En materia comercial, dar celeridad es un desideratum.

Sr. Castillo. — Si es comerciante, lo acepto, pero no todos los acreedores son comerciantes.

Sr. Correa. — Es una situación que no constituye excepción al derecho común. Cualquier acreedor que careciera de títulos, estaría en igualdad de condiciones desventajosas para reclamar su derecho.

Sr. Castillo. — Debe tener en cuenta el señor senador que en esta situación el deudor ha recibido el precio de la venta y se lo ha gastado; es, pues, un insolvente.

Sr. Correa. — Y el acreedor ¿por qué no se aseguró? La ley es poco favorable para los negligentes. Aquí hay negligencia de ese supuesto acreedor ¿qué de extraño es que se perjudique en sus derechos, entonces? Si ese artículo tuviera la consecuencia de proteger simplemente, yo lo acompañaría al señor senador, pero es que esa protección al presunto acreedor, trae perturbaciones en las normas para la enajenación de los fondos del comercio.

Sr. Castillo. — Es un error, señor senador. Las perturbaciones serían para el vendedor que no puede percibir su precio, pendiente de protesta.

Sr. Correa. — Para cualquiera que sea, señor senador. Ya sabe el señor senador cómo está difundida la malicia, cómo se prestaría a la extorsión, pues aparecerían acreedores simulados para obtener ventajas. Si bien puede haber algún acreedor sincero con títulos insuficientes, en la mayor parte de los casos se presentarían acreedores imaginarios que fundarían pretensiones a lo mejor en una supuesta responsabilidad de daños y perjuicios.

Sr. Castillo. — Y tendrían derecho.

Sr. Correa. — Ahí confirma el señor senador que eso no es posible.

Sr. Castillo. — Debo advertirle al señor senador que todas estas situaciones están previstas en el proyecto que no ha tomado en cuenta la Comisión de que forma parte el señor senador; porque en esos casos lo que ocurriría es que el vendedor que quiere retirar el precio y no puede porque hay una oposición, maliciosa, daría caución, retira el precio y el juez le obligaría al que afirmó el crédito que lo haga efectivo, entablando la acción respectiva.

Sr. Correa. — Pero, señor senador, en vez de facilitar esta operación, va a ser un verdadero concurso de acreedores; irán todos al juez a oponerse.

Sr. Serrey. — No siempre el vendedor puede dar fianzas suficientes para responsabilizar todos estos créditos ilimitados que no constan en documento alguno, y son obligaciones que imposibilitarían la venta de la casa de comercio.

Sr. Correa. — Yo admito con el señor senador que pueda existir ese presunto acreedor sin títulos y de buena fe; pero, en consideración a ese caso, se dificulta esta operación, que debe ser corriente y fácil.

Sr. Castillo. — Vuelvo a repetir, que la ope-

ración no se dificulta, porque ha quedado determinada; lo que se dificulta, simplemente, es el pago del precio, y eso no impide la celebración del contrato. El contrato ya está concluido.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto del artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se aprueba, sin observación, el artículo 5º.

—Se lee el artículo 6º.

Sr. Correa. — Este artículo, es el 5º del proyecto del señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Sí, señor.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 7º.

Sr. Presidente. — Está en discusión.

Sr. Vera Ocampo. — Pido la palabra, para pedir una aclaración a la Comisión.

Este artículo 7º prevé el caso de una oposición sin título y creo que no encuadra dentro de la disposición de la última parte del inciso 4º, que motivó la discusión anterior. Creo que se podría suprimir esos términos y quedar simplemente: «En los casos que el crédito fuera cuestionable...»

Sr. Correa. — Note el señor senador que puede tratarse de un caso en que es un acreedor sin títulos, pero reconocido por el enajenante y que consta en los asientos de los libros.

Sr. Vera Ocampo. — El artículo 7º dice: «En los casos en que el oponente no presentara títulos».

Sr. Correa. — Perfectamente. Pero lo reconoce el enajenante y consta en los libros.

Sr. Serrey. — Pero figura en los asientos de sus propios libros.

Sr. Vera Ocampo. — Muy bien, con la explicación de los miembros de la Comisión, entiendo que puede quedar aclarado el concepto.

Sr. Correa. — Este artículo es del proyecto del senador Castillo que coincide también con el proyecto de la Comisión.

Sr. Castillo. — En parte.

Sr. Correa. — Creo que la Comisión lo tomó textualmente, de manera que es un colaborador del despacho de la Comisión el señor senador Castillo.

Sr. Presidente. — No será posible votar el artículo porque el Senado ha quedado sin número.

Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo la hora 18 y 45 minutos.

RAMÓN COLUMBA,
Director de Taquígrafos.